

## Concurso de méritos y cesión de datos de carácter personal. Informe 16/2006

La consulta plantea si, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, un Órgano de la Administración Pública puede facilitar a un funcionario que ha participado en un concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo el acceso a los datos relativos a las puntuaciones obtenidas por los participantes en dicho concurso, así como al resto de las circunstancias y datos de carácter personal que obran en el correspondiente expediente.

Como punto de partida, la puesta a disposición del público de dichos datos supone una cesión de datos de carácter personal, definida en el artículo 3 i ) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal establecido en el artículo 11 de la Ley, donde se establece que la misma solo puede verificarse para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y cesionario y exige para que pueda tener lugar el previo consentimiento del interesado, salvo que concurra alguna de las excepciones contempladas en el apartado segundo del propio artículo 11.

Partiendo de esta previsión, y considerando que no va a ser recabado el consentimiento de los participantes en el proceso selectivo en cuestión, debe analizarse si existe alguna disposición con rango suficiente (general o sectorial) que permita la publicación de los datos.

Pues bien, en el presente caso, debe tenerse en cuenta que el artículo 19.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, establece que “las administraciones públicas seleccionan su personal, ya sea funcionario, ya laboral, de acuerdo con su oferta de empleo público mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en los que se garanticen en todo caso los principios constitucionales de igual, mérito y capacidad **así como el de publicidad**”.

En consecuencia, las normas reguladoras del ingreso y promoción en la función pública vienen a establecer, como criterio esencial que funda su régimen, el principio de publicidad, cuestión lógica dado que resultará necesario el conocimiento por parte de los distintos aspirantes a las pruebas de los resultados de las mismas para conocer adecuadamente las circunstancias concurrentes en el proceso selectivo en el que han tomado parte.

En desarrollo de lo anterior, el Reglamento de Ingreso del personal al servicio de la Administración General de Estado y de Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 marzo, establece en su artículo 22.1 los criterios de publicidad de los resultados de las pruebas de ingreso, regulando el artículo 47 la publicidad de la resolución de los procedimientos de promoción interna. En estos casos, se establece la necesaria publicidad de dichos resultados a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

De otra parte, analizada la normativa autonómica andaluza sobre esta materia, no se extrae la existencia de previsión alguna que venga a matizar las previsiones legales a que se ha hecho mención en los párrafos precedentes de este informe.

En conclusión, los preceptos transcritos, que justifican la aplicación de la excepción establecida por el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica, amparan únicamente la publicidad de las correspondientes resoluciones, por lo que cualquier otro tipo de acceso, como el que se menciona en el escrito de consulta, no encontrará cabida en lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, resultando contrario a lo previsto por dicha norma.